

Desafíos 2025: Cómo abordar retos urgentes del país, tras escasos avances del año pasado

• Especialistas ponen el foco en resolver o, al menos, contener la extensión de graves problemas que enfrenta Chile en materia de salud, enseñanza, vivienda, delincuencia y ventas informales.
• De modo general, en todos los ámbitos, surge como un eje transversal mejorar la eficiencia de la gestión pública, que "no ha dado el ancho", alertan expertos.

¿Cómo lograr la dilatada reactivación educativa?



Aunque el Ejecutivo ha destacado mejoras en los indicadores de aprendizajes, asistencia y reactivación escolar, el rezago que dejó la extensa interrupción por la pandemia mantiene la preocupación sobre el desarrollo de los escolares, a la espera de que se evidencien avances sustanciales en la denominada "reactivación".

María Beyer, académica de la Escuela de Gobierno UC: "Asegurar que los niños aprendan a leer fluidamente no más allá de 2º básico".

"El país está muy atrasado en esa posibilidad (de lograr la reactivación). No se ha invertido lo suficiente y la estrategia tiene metas de largo plazo sin indicadores intermedios que permitan evaluar su marcha y corregir las acciones que se están implementando. Creo que sería bueno revisar la estrategia y dimensionar apropiadamente los indicadores intermedios y los recursos requeridos", señala el ministro de Educación. El académico plantea que "en el corto plazo, desarrollar tres iniciativas bien concretas: en primer lugar, asegurar que los niños aprendan a leer fluidamente no más allá de segundo básico. Para ello se debe fortalecer el programa 'Leo y Sumo Primero' y se deben tomar las recomendaciones del programa 'Por un Chile que Lee'".

La segunda iniciativa, dice, es "hacer obligatorio el Diagnóstico Integral de Aprendizaje (DIA) y trabajar con los colegios un plan de mejoramiento acorde con el diagnóstico, supervisado por la Agencia de Calidad de la Educación que debe contar con una asignación especial para ello".

Una tercera medida sería "fortalecer los aprendizajes fundamentales en 7º y 8º básico y 1º medio; que todos los jóvenes adquieran las competencias lectoras y numéricas fundamentales. Todo esto con evaluaciones especiales bien pensadas y mucho feedback a estudiantes y profesores".

En el mediano y largo plazo, Beyer asegura que "faltan muchas otras complementariedades" y menciona "revisar la carrera docente, asegurar más autonomía de los colegios y un mejor sistema de aseguramiento de la calidad".

Vanessa Mac Auliffe, directora de Educación de Fundación Símate: "Los jóvenes excluidos necesitan que la reactivación y la mejora de la asistencia pase a ser una política de Estado".

"El regreso se ha visibilizado gracias a la Política de Reactivación Educativa, que, en su eje 3, pone el pro-

pósito y las condiciones para la reactivación y asistencia. Sin duda, es un acierto, pero también una preocupación, al menos a corto y mediano plazo", afirma.

La psicóloga educacional plantea que "los recursos, gestión de procesos y capacidades que han permitido estos avances están condicionados a políticas del gobierno en ejercicio. En otras palabras, la sostenibilidad financiera de estas iniciativas se encuentra supeditada a una política gubernamental, por lo que su probabilidad de continuidad está en alto riesgo y, con ella, la recuperación de trayectorias educativas".

Así, considera que "los jóvenes excluidos necesitan que la reactivación y la mejora de la asistencia pase a ser una política de Estado, que asegure su continuidad, financiamiento y sistema de administración a largo plazo, de modo tal que no perdamos lo sembrado hasta ahora".

"La cosecha es fértil y abundante", dice Mac Auliffe, porque se trata de los estudiantes del país, "sus derechos y su futuro".

"Quizás de esa manera podremos avanzar progresivamente en un sistema de protección de trayectorias educativas y soñar" con que niños y jóvenes "no solo vuelvan a la escuela, sino que nunca dejen de asistir", apunta.

¿Existe una posibilidad real de reducir las listas de espera?

Un problema que se repite cada año son las prestaciones médicas pendientes y la abultada lista de espera por especialidades. Este 2025, ¿existe una posibilidad real de reducir las listas de espera?

Paula Daza, directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS) de la UDD: "Proponemos activar automáticamente un segundo prestador en casos críticos como GES Cáncer".

Según la subsecretaría de Salud Pública las cifras actuales evidencian que se requiere una intervención "urgente".

"La lista de espera por especialidad médica ha crecido un 33%, acumulando más de 2,5 millones de prestaciones atrasadas. La lista GES aumentó un 63%, con casi 86 mil prestaciones pendientes. Estamos frente a una crisis sanitaria que exige medidas urgentes", plantea.

En ese sentido, apunta que "desde CIPS-UDD, junto a expertos académicos, de la sociedad civil y del sector privado, hemos diseñado un plan de acción concreto, a implementar en 100 días, que aborda los principales nudos del sistema con un sentido de urgencia real".

Entre las propuestas, enumera una mejor gestión de datos y de los pacientes, con "acceso a información actualizada y precisa sobre diagnósticos, tiempos de espera y contacto de pacientes. Mejora en la eficiencia y calidad de los procesos, asegurando transparencia y confianza en la gestión de datos".

También a una "priorización clara y justa, para que nadie quede atrás sin una explicación fundamentada".

Otro punto es la gestión de la capacidad productiva, donde proponen una "optimización del trabajo de hospitales, redes de

atención primaria y otros prestadores. Monitoreo constante de su desempeño y compromiso".

"Además, proponemos activar automáticamente un segundo prestador en casos críticos como GES Cáncer, para atender los más de 15 mil prestaciones atrasadas en esta área", señala.

Daza señala que "es crucial establecer un centro nacional de trazabilidad de listas de espera, alimentado por datos de los centros de trazabilidad de los servicios de salud", lo que asegura permitirá "una mejor gestión de los casos pendientes y mayor transparencia y confianza en el sistema".

Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello: "Hay que enfrentar en el fondo la causalidad".

Entre las medidas que menciona están

"corregir, por un lado, los modelos de gestión y de atención del sistema público de salud, para aumentar la productividad del sistema y reducir las brechas entre la oferta y la demanda de servicios de salud".

También dice que se debe "diseñar e implementar un modelo de gestión de listas de espera con sistemas de información interoperables que permita detectar y derivar los pacientes en espera oportunamente dentro del sistema público o al privado".

Otra propuesta, indica Sánchez, es "flexibilizar en forma inteligente la gestión médica para incentivar el trabajo fuera de horarios normales, sujeto a normas e incentivos claros y bien gestionados y supervisados para evitar el abuso", y "resignar más recursos a establecimientos que claramente lo requieren, pero amarrados a cumplimiento de indicadores y metas, sancionando el incumplimiento".



Actualmente, hay 2,5 millones de prestaciones atrasadas.

¿Se logrará disminuir el déficit habitacional?

La falta de viviendas es otro de los desafíos pendientes, considerando que, lejos de disminuir, ha crecido al punto que los últimos datos estiman en más de 650 mil el déficit a nivel nacional, con un 17% de esas familias viviendo en campamentos.

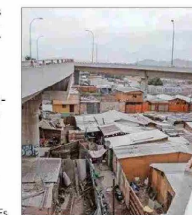
Cristián Monckeberg, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la U. del Alba: "Se requerirá mucha gestión para que el próximo gobierno disminuya el déficit".

El ministro de Vivienda plantea que a noviembre iban entregadas 163 mil viviendas, por lo que "para cumplir, deberían existir hoy más de 75 mil viviendas en ejecución con al menos un 25% de avance físico, y eso no está. Es probable que falten 20 mil al final del Gobierno". Añade que "el problema no es solo no cumplir la meta: es más grave el déficit que quedará al final del Gobierno, es altísimo, sobre 500 mil. Ahí está el desafío para la próxima administración: cómo disminuir en forma urgente la falta de viviendas, un déficit altísimo para las familias".

En ese sentido, plantea que "si hay algo que este Gobierno logró es que la vivienda sea una prioridad política y social, pero la realidad es más dura, y se requerirá mucha gestión para que el próximo gobierno disminuya el déficit".

Benjamín Donoso, capellán de Techo Chile: "Aumentar el ritmo de construcción de viviendas y focalizar los esfuerzos en grupos que han crecido de manera exponencial".

"En 2024, Chile no fue capaz de abordar de manera efectiva la crisis habitacional. Los datos son claros: desde 2010 a 2023, el número de familias viviendo en campamentos aumentó en más de 400%, pasando de 20 mil a 113 mil. Es evidente que las estrategias adoptadas en los últimos años no dan el ancho en un abordaje suficiente a esta problemática".



El Ministerio de Vivienda comprometió la entrega de 260 mil viviendas al término de este periodo presidencial.

Para enfrentar esta situación, Donoso apunta que en 2025 "es fundamental solo aumentar el ritmo de construcción de viviendas, sino también focalizar los esfuerzos en aquellos grupos que han crecido de manera exponencial y que representan el rostro más crudo de la emergencia habitacional, como los hogares en campamentos".

Dice que "sin una estrategia más decidida en la asignación de recursos para medidas específicas para estos hogares, la magnitud del problema no disminuirá, dificultando aún más la capacidad del Estado para dar una solución a la crisis habitacional actual hacia el futuro".

Y puntualiza que es "urgente diversificar las modalidades de soluciones habitacionales con un esfuerzo mancomunado entre el Estado, la sociedad civil y el mundo privado, incluyendo estrategias transitorias que permitan avanzar hacia el acceso a viviendas adecuadas en menores tiempos para todas las familias según sus realidades".

¿Se podrán recuperar los barrios del impacto delictual en ascenso?

El descontrolado avance de la delincuencia se ha tomado la agenda pública, en un año en que también se concretó la aprobación del Ministerio de Seguridad.

Pia Greene, académica del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado USS: "A cada barrio hay que caracterizarlo para focalizar trabajos".

Para la experta en seguridad, hoy "son varios los desafíos en materia de seguridad".

"Recuperar los barrios, pero hay que hacer una sanatoria de políticas públicas, que requieren urgencia y foco para poder recuperar estos barrios".

La doctora en Ciencias Políticas dice que "hay que ver varios temas: primero, tenemos que saber qué barrios hay que recuperar, cuáles son las tipologías de delitos que están ocurriendo y dónde están esos barrios. Porque es muy distinto si hay un barrio que tiene muchos homicidios, pero tenemos que ver cuál es su foco para aplicar la política pública adecuada, porque si solo lo hacemos en general, vamos a fallar, porque los delitos se combaten de forma distinta".

"A cada barrio hay que caracterizarlo, ver en el territorio qué tipo de personas viven ahí, cuáles son los tipos de delitos y sus horarios, para focalizar los trabajos", señala la también jefe de la división de Seguridad Pública del Ministerio del Interior (2018-2020).

A juicio de Greene, "existen programas de barrios críticos en donde se focalizan los recursos, pero eso no ha sido suficientemente exitoso este año porque el fenómeno delictual en Chile ha cambiado muy rápidamente este último tiempo".

Por otro lado, enfatiza en que "tenemos que hablar de prevención social y situacional para recuperar los barrios".

Felipe Harboe, director de Paz Ciudadana: "Acciones coordinadas: intervenciones urbanas, sociales y policíacas... Decisión, coraje y mediciones autónomas".

Para el exsenador y exsubsecretario del Interior, "el Estado tiene la obligación de recuperar el control de las zonas afectadas por la delincuencia y el crimen organizado" (L.) (mediante) "una estrategia integral de largo plazo, más allá de los gobiernos de turno, que aborde los desafíos urbanos, equipamiento e infraestructura".

Añade que "luego la estrategia debe considerar incentivos económicos para las familias y municipios para la reinserción escolar de jóvenes desahuciados, instalación de 'oficinas de oportunidades laborales' de cooperación público-privada para dar trabajos licitos a jóvenes y adultos".



Las medidas de seguridad deben involucrar un esfuerzo mancomunado entre diversas instituciones, plantean especialistas.

El también investigador de la USS apunta a la necesidad de "un trabajo de inteligencia que permita identificar los principales cabezas y operadores del crimen organizado en el territorio y diseñar una estrategia de persecución para desarticularlos y lograr condenas emblemáticas, mostrando en el barrio al destino penal de los condenados para que actúe como efecto desincentivador de la actividad criminal".

"En materia policial se requerirá rotación de personal para evitar complacencia, amenazas o penetración del crimen en las estructuras policíacas. Se necesita controlar los esfuerzos en prevención, control y sanción para ser más eficientes en el uso de recursos públicos orientados a resultados", acota.

Por ello, puntualiza que "un elemento importante será crear oferta pública de desahucios, rehabilitación y tratamiento de adicciones para poder sacar a jóvenes adictos de la causa de violencia o de sus actos delictuales".

¿Podrá ser controlado el comercio ambulante?



DERRUIDOS.— Sectores de la capital como Meiggs o la Vega Central se han deteriorado de la mano de la actividad informal.

Con distintos tipos de medidas, que van desde equipos de fiscalización hasta el aumento de permisos municipales, algunas autoridades han buscado enfrentar el fenómeno del comercio ambulante, que prolifera en barrios comerciales de las distintas ciudades.

Otras iniciativas han apelado a la denominada arquitectura "hostil" para sacar a los vendedores informales de lugares tomados, que afectan a los locales establecidos y traen consigo incivildades, espacios insalubres y problemas de seguridad.

¿Cómo contener el comercio ambulante? José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio: "Hay que combatir este

fenómeno desde las fronteras".

El representante de la CNC dice que "contener y combatir el comercio ambulante hoy es una prioridad que debiera comprometer a todos los niveles del Estado y también a los comerciantes y consumidores. Sin duda, esta es una tarea que implica tiempo, pero también voluntad, recursos permanentes y una adecuada coordinación entre municipios, policías y servicios públicos".

"Ha quedado demostrado que acciones esporádicas y que no aborden la problemática en su conjunto han fracasado, por lo que es necesario recoger experiencias comparadas y nuevas ideas que nos permitan cambiar la forma de hacer las cosas, combatiendo este fenómeno desde las fronteras y pasando por las áreas de transporte,

almacenamiento y distribución que en muchos casos lleva aparejado el crimen organizado", puntualiza.

Pakomio añade que el trabajo "debe ir acompañado de hacer parte al consumidor final del problema, pues mientras exista gente dispuesta a comprar en estas condiciones y exponiendo en muchos casos su salud y la de los suyos, el comercio ilegal ambulante va a seguir existiendo".

El llamado es a las autoridades a generar políticas públicas y acciones tácticas que generen soluciones a corto plazo, comenzando por ejemplo con la eliminación de los permisos precarios que tanto daño le han hecho al comercio formal y establecido de todo Chile", señala.